

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

<b>Demandante</b>	LICETH EUGENIA ESTRADA PIZARRO
<b>Demandado</b>	AFP PROTECCIÓN S.A.
<b>Tipo de proceso</b>	Ordinario
<b>Radicado Nacional</b>	05-001-31-05- <b>003-2019-00503</b> -02
<b>Instancia</b>	Segunda
<b>Providencia</b>	Interlocutorio 25 de 2023
<b>Tema y subtema</b>	Apelación liquidación de agencias en derecho
<b>Decisión</b>	Confirma

**Medellín, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez y Claudia Angelica Martínez Castillo y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante, contra el auto del 20 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Liceth Eugenia Estrada Pizarro**, código radicado número 05001 3105 **003 2019 00503** 02.

**Antecedentes**

Para lo que interesa, mediante proveído del 20 de enero del año que avanza, el juzgado de conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P., liquidó y aprobó las agencias en derecho en **\$0**.

El apoderado de la accionante formuló recurso de reposición y apelación en los siguientes términos:

"(...)

*No estoy de acuerdo con el valor definido por el Despacho por cuanto el mismo no resulta equitativo y razonable si se tiene en cuenta la realidad procesal del debate.*

*El valor liquidado por el despacho es erróneamente interpretado, pues se trata de una PRESTACIÓN PERIODICA. Teniendo en cuenta que se le venció en proceso a la parte demandada, se allego prueba pericial la cual demostró que la demandante contaba con invalidez lo cual llevó a que se le reconociera la invalidez, por lo anterior la parte vencida tendrá que reconocer Costas y Agencias en derecho.*

*En efecto, la realidad del debate indica que:*

**1. PRETENSIONES.** Fueron SIETE: (I) NULIDAD DEL TRASLADO; (II) RECONOCIMIENTO de calificación integral (III) Se CONDENE a PROTECCIÓN al reconocimiento y pago de pensión (IV) pago del retroactivo (V) se CONDENE a PROTECCIÓN a indemnizar por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales (VI) Se declare y reconozca otro derecho diferente a los solicitados en la demanda (VII) gastos procesales y agencias en derecho

**2. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA. CONDENATORIA. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: CONFIRMA.**

**3. DEBATE PROCESAL Y PROBATORIO.** La gestión del apoderado se resume así: (I) Presentación de la demanda;); (II) trámite de notificación; (III) asistencia a audiencia del artículo 77 y 80 del C. P. DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IV) alegatos de conclusión.

**4. DURACIÓN DE LA GESTIÓN.** La demanda se presentó el 14 de agosto del 2019, es decir, a la fecha han transcurrido 34 meses de desarrollo del proceso.

### **CONCLUSIÓN.**

*No existe duda alguna respecto de la EFICACIA DE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO de las pretensiones solicitadas, la utilidad del trámite, la participación en todas las etapas y actuaciones procesales por lo que, dada la naturaleza del asunto y la actitud reacia de la demandada a reconocer el derecho, el valor de las agencias en derecho **DEBE SER PROPORCIONAL AL TRABAJO REALIZADO.***

### **PETICIÓN.**

*Por lo anterior, solicito liquidar las costas procesales con el máximo indicado en el Acuerdo 1887 de 2003 y, que por tratarse de prestaciones periódicas el máximo permitido es hasta 10 salarios mínimos mensuales, atendiendo a la duración, clase de proceso, actividad realizada por el apoderado de la parte demandante, y haciendo aplicación de los principios de equidad y justicia, y a los criterios rectores previstos en el Acuerdo 1.887 de 2.003 del Consejo Superior de la Judicatura, pues el proceso se atendió de manera permanente, aguda, concienzuda y eficaz como consta a lo largo del expediente."*

Mediante proveído del 13 de abril del cursante año, el Juzgado de conocimiento, señaló:

*En torno a la disquisición planteada, se tiene en cuenta que, para efectos de la tasación de las agencias en derecho en este proceso, dado que fue radicado en el*

*mes de julio de 2019, el acuerdo aplicable en su integridad es el PSAA16 10554 de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con sus artículos 6 y 7.*

*No obstante, lo anterior, dado que la recurrente fija principalmente su reparo respecto al valor en que fueron fijadas las agencias en derecho, este Despacho debe traer a colación lo resuelto por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de segunda instancia proferida el día 10 de noviembre de 2022.*

*En la parte resolutive de dicha sentencia, el Tribunal Superior de Medellín revocó el numeral séptimo del fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín en el presente proceso Radicado No. 2019-503, para absolver a la demandada de las costas del proceso y no ordenó costas en segunda instancia.*

*Así mismo, la sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mencionó en la parte considerativa de la mentada sentencia:*

*"Sin costas en ninguna de las instancias, en tanto, la demandante debía acudir al proceso ordinario a fin controvertir los dictámenes emitidos por Suramericana, razón por la cual se revoca este punto de la decisión".*

*Por lo anterior, no se repondrá el auto que liquida las costas, agencias en Derecho en la suma de \$0.00 en ambas instancias, toda vez que así fue ordenado por el superior jerárquico y debidamente acatado por este Despacho.*

*En todo caso, tal como lo solicita el apoderado del demandante, se concederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del C.P.T.S.S."*

## **Consideraciones**

La inconformidad radica en la fijación de las agencias, pues el recurrente argumenta en síntesis que las mismas no se compadecen con la actuación del apoderado.

Sea lo primero aclarar que, para dirimir el asunto, se atiende a lo establecido en **el Acuerdo PSAA1610554 del 5 de agosto de 2016** pues éste, entró a regir **a partir de su publicación en dicha fecha** y la demanda **se presentó el 31 de julio del año 2019** (carpeta expediente digital), luego no es aplicable lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 como lo refiere el recurrente.

Aclarado lo anterior, el acuerdo vigente dispone que, en procesos declarativos en general, cuando se formulen pretensiones de contenido pecuniario, **de mayor cuantía, en primera instancia, se fijaran entre el 3% y el 7.5% de lo pedido** y en aquellos asuntos **que carezcan de cuantía, entre 1 y 10 SMLV**.

Ahora, si bien es cierto la norma señalada fija unos topes para el establecimiento de las agencias en derecho, **el artículo 365 dispone los criterios a seguir para la condena en costas<sup>1</sup> entre otros señala:** "(...) **8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. (...)**"

Para su liquidación, en el artículo 366 establece, entre otras reglas, las siguientes:

*"(...) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, las demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.*

*4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. ( . ..)"*

Frente a lo anterior, vale la pena también rememorar lo que expuso el órgano de cierre constitucional respecto a la condena en costas contemplada en los preceptos 365 y 366 del C.G.P.:

*"(...) La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe. o siquiera culpable de la parte condenada. Sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas,*

---

<sup>1</sup> De la cual hacen parte las agencias que hoy se debaten.

*conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas, como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaría de la condena incurrió en el proceso. Siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte. Ni pueden asumirse como una sanción en su contra. (...)"*

Igualmente es de recordar, como lo ha manifestado la jurisprudencia especializada que: ***"las agencias en derecho no corresponden a un pago de honorarios pues, al tratarse de un reconocimiento que se realiza a la parte vencedora, bien se a que haya actuado por intermedio de apoderado o directamente en el proceso, no corresponden al reconocimiento de una labor profesional, ..."***<sup>2</sup>

Luego, teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el concepto de costas incluye las agencias en derecho correspondientes a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del trámite judicial, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3° y 4° del artículo 366 del CGP, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados a su abogado o hacer parte de estos, sin que impliquen además una condena de manera "automática" u "objetiva" frente a aquel que resulta vencido en el litigio. Ello, en consideración a que deben observarse una serie de factores, tales como la existencia de pruebas sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el fallador debe ponderar dichas circunstancias y en esa medida, en el caso concreto esta Corporación razonó que en virtud del numeral 8° del artículo 365 del CGP, estas no se causaron, pues nótese que dentro del trámite judicial la parte vencedora no tuvo que sufragar gasto alguno, dado que el dictamen decretado por esta Sala fue pagado por el fondo demandado, aunado a que respecto al apoderamiento al que hace referencia el recurrente, debe decirse que en este caso, no fue preponderante, y es que entiéndase que si bien no desconoce la Sala la labor

---

<sup>2</sup> Sentencia Consejo de Estado - SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01 del 6 de agosto de 2019.

del abogado, la cual deberá ser retribuída por su cliente mediante el pago de los honorarios, lo cierto es, que en este asunto, **la pensión se otorgó teniendo en cuenta un hecho sobreviniente**, pues aunque la demanda se instauró en el año 2019, **de haberse fallado con la prueba que traía se hubiesen desestimado las pretensiones, al punto que fue el dictamen del CES – decretado oficiosamente por la magistrada ponente, emitido el 10 de octubre de 2022**, el que sirvió de sustento para la condena, **al establecer este que la actora presenta una PCL del 52,3% estructurada el 02 de mayo de 2022, "Fecha de evaluación por Unidad del dolor INC", por los diagnósticos de: Trastorno de Ansiedad y depresión. Fibromialgia. Artrosis secundaria múltiple. Lesión de segmentos móviles de columna lumbar. Hipertensión arterial controlada. Diabetes mellitus controlada con medicamento oral. Histerectomía abdominal"**, (archivo 08.pdf. pág 23); es decir, para la época de la presentación de la demanda y en que se reclamó el derecho al fondo vía administrativa, éste no podía reconocer la prestación, **porque aún no se alcanzaba por la afiliada el porcentaje mínimo para el derecho pensional pedido**, siendo sólo en el **curso de la segunda instancia** cuando se superó tal exigencia y en esa medida, **al estar fundada la decisión en un hecho sobreviniente**, esta colegiatura estimó que para este caso en particular, a luz de las normas vigentes, no hubo causación de costas procesales (ver sentencias SL3707-2018 y SL3769-2019), sin que existan elementos que permitan variar tal determinación, **por lo que se confirma la misma**.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**,

## **Resuelve**


**Confirmar** el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de enero del año 2023, dentro del proceso ordinario laboral

promovido por **Liceth Eugenia Estrada Pizarro** en contra de la **AFP Protección S.A.**

**Sin costas** en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

**Las magistradas,** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados No. 87 del 24 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>